



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, doce de agosto de dos mil veintidós

19-010

Proceso: **APELA SENTENCIA**
Demandante: **RODRIGO OSPINA LÓPEZ**
Demandados: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-001-2017-00005-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

En los términos del poder allegado, se reconoce personería a la Doctora **LUISA FERNANDA MIRA LUNA**, identificada con C.C. 1.020.403.223 y T.P. 178.184 del CS de la J. del C.S. de la J., para que continúe representando los intereses de Colpensiones de acuerdo a la sustitución realizada por el Dr. **JUAN CARLOS MUÑOZ MONTILLA** en calidad de representante legal de la sociedad **MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S.** apoderada general de **COLPENSIONES** según escritura pública No. 3374 del 2 de septiembre de 2019 de la Notaria 9 del Circulo Notarial de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 023** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se condene a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, por haber laborado como periodista, conforme al Decreto 758 de 1990 y el Decreto 2090 de 2003, desde el momento en el que reunió los requisitos

legales, con los incrementos legales, las mesadas adicionales, los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que durante toda su vida ha desempeñado la actividad de periodista ocupando todos los cargos que la profesión comporta, durante más de 27 años, cumpliendo lo exigido en la Ley 797 de 2003.
- Que laboró al servicio de Radio Santa Bárbara desde el 1º de marzo de 1979 hasta el 10 de marzo de 2000, es decir que en total fueron 21 años y 9 días, de los cuales 15 años lo fueron antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, cumpliendo así con la exigencia del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003.
- Que ha cotizado al sistema 1.402 semanas y en aplicación del principio de favorabilidad se debe declarar que es beneficiario del régimen de transición y que tiene derecho a la pensión de vejez.
- Que solicitó a Colpensiones la pensión de vejez la cual le fue negada a través de Resolución GNR 146647 de 2016 confirmada mediante Resolución GNR 253731 del mismo año.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos indicó que acepta como cierto que el demandante ha cotizado 1.402 semanas, pero aclara que no acredita los requisitos del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003 al no satisfacer 500 semanas de cotización especial a la entrada de dicha norma. Así mismo aceptó como cierto el contenido de las resoluciones expedidas por la entidad a través de las cuales se negó el derecho por no acreditar los requisitos de Ley. En cuanto a los demás hechos manifestó que no le constan por lo que serán objeto de debate probatorio, especialmente lo referente a que se haya desempeñado como periodista, pues no existen documentos que den cuentas que se desempeñó como tal y menos que ejerció los cargos a que hace alusión la norma.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 15 de enero de 2019 **ABSOLVIÓ a COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor

RODRIGO OSPINA LÓPEZ, a quien condenó en costas fijando las agencias en derecho en la suma de \$828.116.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ

En primer lugar indicó que en cuanto a la pensión especial de vejez para periodistas el numeral segundo del artículo 2 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, facultó al Presidente de la República para que regulara el régimen especial de requisitos para acceder a las prestaciones pensionales de ciertas actividades y en uso de dichas facultades el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1281 de 1994 que en su artículo 11 regulaba un régimen de transición para periodistas para acceder a la pensión especial de vejez, disponiendo que el mismo se aplicaría que a quienes al momento de entrar en vigencia dicha norma tuvieran 35 o más años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados.

El Decreto 1281 de 1994 fue derogado expresamente por el Decreto 2090 de 2003, en el cual ya no se contemplaba ninguna prestación especial para periodistas, pero se incluyó un régimen de transición bajo el cual se respetaba a ciertas personas el derecho a acceder a la pensión especial de vejez conforme a las prerrogativas del Decreto 1281 de 1994, para quienes al 26 de junio de 2003 tuvieran 500 semanas de cotización especial en actividad de alto riesgo y además tuvieran los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003. Las 500 semanas referidas fueron luego reducidas a 468, toda vez que las cotizaciones especiales solo surgieron con el Decreto 1281 de 1994, en ese sentido era imposible que entre la entrada en vigencia del mismo que fue el 23 de junio de 1994 y la entrada en vigencia del 2090 de 2003 que fue el 28 de julio de 2003, se acumularan las 500 semanas pedidas, esto de acuerdo con la Resolución 0001 de 2003 del Ministerio de Protección Social.

Advirtió la a quo que la parte demandante confunde el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el descrito en el artículo 6° del Decreto 2090 de 2003, pues alega que el segundo remite al Acuerdo 049 de 1990, lo cual es errónea pues el Decreto 2090 habla de un régimen para pensiones especiales de las normas anteriores, para el presente caso del Decreto 1281 de 1994, mientras que el Acuerdo 049 de 1990, era el régimen de pensiones del extinto ISS aplicado de forma general, cuyo régimen de transición también es genérico, pues no requiere poseer una calidad especial alguna, más allá de los requisitos que se encuentran consagrados en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100.

De otro lado indicó que en el presente caso, el demandante no cumple con los requisitos establecidos para beneficiarse del régimen de transición para pensión especial de periodistas del artículo 11 del Decreto 1281 de 1984, dado que a la entrada en vigencia del mismo no tenía ni 40 años de edad, ya que tenía 33 años de edad y tampoco tenía 15 años de servicios o 750 semanas, pues según la historia laboral solo había cotizado para tal data, 490.71 semanas, de las cuales 359.71 lo fueron en RADIO CADENA ECOS DE RIONEGRO, PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA Y EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO, las cuales son insuficientes para cumplir tal requisitos, por lo que concluyó que el demandante no era beneficiario del régimen de transición para periodistas que le permitiría acceder a la pensión especial de vejez del Decreto 1281 de 1994, por lo que es irrelevante si cumplía o no con las semanas de cotización especial entre dicha normativa y el Decreto 2090 de 2003, pues el artículo 6° de esta norma, hablaba de un régimen de transición para pensiones especiales, es decir, para quienes cumplieran los requisitos de la norma anteriores, esto es del Decreto 1281 de 1994.

De otro lado manifestó que tampoco es posible reconocer la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990 como se solicita en la demanda, pues para esto debería cumplir con los requisitos del régimen de transición previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los cuales tampoco acredita el actor, pues para el 1° de abril de 1994, tenía 557 semanas y 33 años de edad, por lo que no tiene derecho a que se le aplique la norma anterior, lo que significa que su pensión se debe reconocer en atención a lo dispuesto en el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, que exige una edad de 62 años de edad, la cual aún no ha alcanzado, por lo que ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

2.2 APELACIÓN DEMANDANTE

Manifiesta que habiéndose pedido la pensión de conformidad con el Decreto 758 de 1990 y el Decreto 2090 de 2003, se debe reconocer la pensión de vejez, toda vez que el demandante fue empleado por RADIO SANTA BARBARA desde el 1° de marzo de 1979 hasta el 1° de marzo de 2000, hecho que se relata en la Resolución 253731 de 2016, situación que no fue tomada en cuenta por la juez, tiempo con el cual se acredita el requisito exigido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, los 15 años de servicio, pues si la entidad recibió una certificación de que un empleador vinculó un trabajador en la fecha allí reseñada no optó por hacer ningún tipo de acción para hacer el cobro de las respectivas cotizaciones, exonerándose autónomamente de la obligación de hacer los correspondientes requerimientos para que el empleador hiciera las cotizaciones como es su obligación.

Aduce que al tener en cuenta las semanas laboradas con RADIO SANTABARBARA el actor acredita los requisitos para obtener la pensión de vejez, pues era obligación de COLPENSIONES hacer el cobro de las mismas, dado que además el actor cumple los requisitos del Decreto 1281 de 1994, del régimen de transición el Decreto 2090 artículo 6º, ya que cumple con el requisito de las 500 semanas, además cumple con el requisito de la Ley 797 de 2003 y tiene 15 años de servicio al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Solicita se confirme la sentencia de primera instancia, pues quedó plenamente establecido que el señor Rodrigo Ospina López no es beneficiario del Régimen de Transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a 1º de abril de 1994 contaba con 33 años de edad, ya que nació el 11 de septiembre de 1960, ni tampoco acredita los 15 años de servicio como se puede observar en su historia laboral, motivo que desvirtúa la aplicación del Régimen de Transición establecido en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, lo que no permite la aplicación del Decreto 1281 de 1994.

Agrega que quedó demostrado que el trabajo desempeñado por el demandante no es considerado como una actividad de alto riesgo, ya que no aparece enmarcada en el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 que establece:

“Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

- 1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.*
- 2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.*
- 3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.*
- 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.*
- 5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes.*
- 6. En los Cuerpos de Bomberos, la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios.*
- 7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza pública”.*

De acuerdo lo ordenado en la norma en cita, tenemos que la actividad de periodista, no se encuentra enmarcada en el Decreto 2090 de 2003 como actividad de alto riesgo, se debe tener en cuenta que la pensión anticipada por trabajos de mayor riesgo ampara a las personas que por su actividad, oficio o profesión se encuentran expuestas a situaciones que afectan notoriamente su salud al punto de generar una menor expectativa de vida o estar expuestas a un mayor nivel de siniestralidad,

requisito que no cumple la actividad desarrollada por el demandante, motivo por el cual tampoco le es aplicable el Decreto en mención.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Conforme al recurso de apelación consiste en determinar si es procedente reconocer la pensión especial de alto riesgo por actividad de periodista, analizando si se debe reconocer el tiempo que se aduce como laborado con RADIO SANTA BARBARA, dependiendo de ello se estudiará si proceden los intereses moratorios.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, se estudiará si se cumplen los presupuestos para acceder a la pensión especial por actividad de alto riesgo, por haber laborado el señor RODRIGO OSPINA LÓPEZ como periodista.

Pues bien, la pensión de jubilación para los periodistas fue objeto de regulación mediante la Ley 37 de 1973 y su decreto reglamentario 1293 de 1974, cuando se creó el régimen de seguridad social del periodista profesional y, posteriormente, en virtud de la Ley 100 de 1993 se permitió hacer extensivo a los periodistas el régimen especial de la pensión de vejez en actividades de alto riesgo, otorgándole al Gobierno Nacional facultades extraordinarias con el fin de determinar las condiciones y requisitos para acceder a la pensión especial por actividades de alto riesgo y para armonizar y ajustar las normas de la pensión de periodistas con tarjeta profesional, conforme el numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, en virtud de las cuales se expidió el Decreto 1281 de 1994 que reguló las actividades de alto riesgo y en su artículo 11 estableció un régimen de transición para que los periodistas pudieran acceder a la pensión especial de vejez.

Dicha norma fue expresamente derogada por el Decreto 2090 de 2003 que reguló las pensiones especiales por actividades de alto riesgo, siendo la actualmente vigente, norma que no contempló la actividad de periodista dentro de las de alto riesgo como se observa en su artículo 2°:

“ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR. Se consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

- 1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos.*
- 2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud ocupacional.*
- 3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.*
- 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.*
- 5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia*

expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas vigentes”

Empero el citado Decreto contempla un régimen de transición que permite la aplicación de la norma anterior, estableciendo en su artículo 6°:

“Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003” (negritas de la Sala)

Dicho artículo fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-663-07 de 29 de agosto de 2007, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, en el entendido que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo.

Respecto el requisito contemplado en el párrafo de la referida norma, que exige que para beneficiarse de dicha transición también se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que a 1° de abril de 1994, el actor debía acreditar 40 años de edad o 15 años de servicios, a partir de la sentencia con radicado 69105 del 27 de marzo de 2019 (SL1353-2019), donde se estimó que dicha exigencia es desproporcionada y contraria a la finalidad del régimen especial y transitorio para acceder a la pensión de vejez, acogiendo los planteamientos de nuestro órgano de cierre, es estima que no se debe exigir la acreditación de los requisitos consagrados en el párrafo del artículo 6° del Decreto 2090 de 2003 para la aplicación del régimen de transición contemplado en dicho decreto, teniendo en cuenta lo dicho por la Corte en la sentencia referida, donde indicó:

“Ahora, sobre lo previsto en el párrafo del artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003, la Sala considera oportuno fijar su alcance, toda vez que en tal precepto, para mantener el régimen de transición que en ella se establece a efectos del reconocimiento de la pensión especial de vejez, remite a los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que regula la transición de la prestación ordinaria de vejez, lo cual se considera excesivo dada la teleología de un régimen especial y diferente.

En efecto, la pensión anticipada por trabajos de mayor riesgo ampara a las personas que por su actividad, oficio o profesión se encuentran expuestas a situaciones que afectan notoriamente su salud al punto de generar una menor expectativa de vida o estar expuestas a un mayor nivel de siniestralidad.

Por ello, la exigencia de requisitos para obtener una pensión especial de vejez, son inferiores a los consagrados en términos generales para quienes no se encuentran expuestos en forma superlativa a

riesgos de carácter laboral y justifica con suficiencia que se consagren en proporción a la actividad que los trabajadores desarrollan en su espacio laboral, en cuanto están sujetos a una mengua de sus expectativas de vida saludable.

Y más adelante dijo:

Luego, para la Sala, el parágrafo del artículo 6.º del Decreto 2090 de 2003 no acompasa con la regulación de la pensión especial de vejez por alto riesgo y, desde esa perspectiva implica que para ser beneficiario de las prerrogativas transitorias, es necesario acreditar las exigencias del inciso primero de dicho artículo, en cuanto las dispuestas en su parágrafo consagran las requeridas para obtener la pensión ordinaria de vejez en el régimen general, toda vez que como se indicó, una y otra son diferentes; interpretación que en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, es más adecuada con el propósito teleológico de la normativa.”

Posición reiterada en las sentencias con radicado 67163 (SL999) y 74163 (SL3434) de 2020

Por lo que concluye la Sala que para beneficiarse del régimen de transición del Decreto 2090 de 2003 basta con acreditar las 500 semanas laboradas en actividad de alto riesgo para el 28 de julio de 2003, semanas con las que al parecer cumple con suficiencia el actor, pues según el recuento que hace Colpensiones en la Resolución GNR 253731 de 2016 y la historia laboral visible a folios 68/80, el señor RODRIGO OSPINA para tal data contaba con más de 500 semanas laboradas en empresas que ejercen actividades relacionadas con el oficio de periodista.

Sin embargo, antes de hacer un análisis detallado, de si efectivamente las semanas laboradas en estas empresas el actor ejercía como periodista conforme el Decreto 1837 de 1994 para efectos de determinar si se acreditan las semanas exigidas en el Decreto 2090 de 2003 para beneficiarse de la transición, es menester analizar si cumple con los requisitos de la norma anterior que pretende le sea aplicada, es decir el Decreto 1281 de 1994:

“ARTICULO 11. REGIMEN DE TRANSICION PARA LOS PERIODISTAS PARA ACCEDER A LA PENSION ESPECIAL DE VEJEZ. *La edad de los periodistas con tarjeta profesional para acceder a la pensión especial de vejez será de 55 años, con 1.250 semanas cotizadas, para aquellos que al momento de entrar en vigencia este decreto tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados.” (subrayas de la Sala)*

Esta norma fue regulada por el Decreto 1837 de 1994 que en su artículo 1º estableció:

“Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente Decreto se aplica a las pensiones de vejez o jubilación de los periodistas afiliados al Sistema General de Pensiones, que al momento de entrar en vigencia el Decreto 1281 de 1994 tenían 35 años o más de edad si son mujeres, o 40 años o más de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, y que hayan obtenido su tarjeta profesional de conformidad con la Ley 51 de 1975 y el Decreto 733 de 1976.

Para los efectos de este Decreto, se entiende por periodista con tarjeta profesional vigente, al afiliado que en forma habitual y remunerada en un medio de comunicación social, se dedica al ejercicio de labores intelectuales tales como las de director, subdirector, editor, asistente de los anteriores que ejerzan funciones periodísticas y no exclusivamente administrativas, técnicas o de locución; jefe, subjefe, o coordinador de información de redacción; jefe, subjefe, o asistente de sección especializada en redacción o de corresponsales; articulista de planta, corresponsal de publicaciones nacionales o extranjeras, redactor, reportero gráfico, cronista y corrector de estilo, diagramador y caricaturista. (SUBRAYAS DE LA SALA)”

De la lectura de las normas en comento se observa que es necesario para beneficiarse del régimen de transición que permite acceder a la pensión especial de vejez que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1281 de 1994, esto es 22 de junio de 1994, el actor hubiera acreditado 40 años de edad o 15 años de servicio que equivalen a 750 semanas.

Sin embargo, según las pruebas allegadas al plenario se observa que el señor OSPINA LÓPEZ para tal data contaba con 33 años de edad, ya que nació el 11 de septiembre de 1960 y había cotizado 490.57 semanas, es decir, que no acreditaba los requisitos para beneficiarse de la pensión especial de vejez contemplada en el Decreto 1281 de 1994, por lo que no puede concedérsele tal prestación y como la misma desapareció con la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, ya no puede reconocerse esta pensión especial, pues la actividad de periodista dejó de considerarse como de alto riesgo.

Así lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1938-2021, radicación 85071 del 12 de mayo de 2021, donde se dijo:

“Vistas así las cosas, la verdadera inconformidad del recurrente radica en que el Tribunal aplicó el artículo 11 del Decreto 1281 de 1994, acatando así la jurisprudencia del trabajo, conforme a la cual, para ser beneficiario del régimen de transición que allí se establece, el afiliado debe acreditar que satisface las exigencias en él contempladas, lo que no advirtió el juzgador que ocurriera en este caso, luego, luce totalmente acertada la decisión del ad quem al encontrar insatisfechos los requisitos para que el demandante y ahora recurrente pudiera acceder a la pensión especial de alto riesgo en calidad de periodista.

Por manera que, no asiste ninguna razón a la censura al sostener que el artículo 11 del Decreto 1281 de 1994 creó una pensión especial para los periodistas y no un régimen de transición, pues si así lo fuera, que no lo es, la misma quedó derogada por el Decreto 2090 de 2003, publicado en el Diario Oficial n° 45.262 de 28 de julio de 2003, data para la cual tampoco contaba con la edad mínima para la pensión especial.

En esa línea, considera esta Sala de la Corte que el artículo 11 del Decreto 1281 de 1994 lo que hizo fue extender a los periodistas el régimen especial de alto riesgo, para permitir que los afiliados que ejercieran esa profesión tuvieran la posibilidad de acceder a la pensión del régimen especial como beneficiarios del régimen de transición que allí se estableció; sin embargo, como la actividad no estaba definida como de alto riesgo por la norma anterior, era lógico que la misma disposición consagrara el ingreso base de liquidación, al igual que lo hizo el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para sus beneficiarios y dispusiera que el monto de la pensión será el establecido en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, entendiéndose en este caso, cualquier régimen que se tuviera.

Por otra parte, no encuentra la Sala en el segundo cargo sustentación alguna para considerar una infracción de la decisión del Tribunal al artículo 13 de la Constitución Política, pues establecer quiénes son los beneficiarios de un régimen de transición a partir de una edad y un tiempo de servicios no comporta restricción o condicionamiento absolutamente arbitrario, como equivocadamente lo señala la censura, puesto que es connatural a un régimen de transición determinar quiénes son sus beneficiarios en razón a la cercanía que puedan tener con la adquisición del derecho pensional cuando se produce un cambio legislativo que pueda afectar la posibilidad que se tenía de acceder a la pensión bajo la normatividad derogada.”

Ahora, en el recurso de alzada la apoderada del demandante aduce que se debió tener en cuenta el tiempo laborado con RADIO SANTA BARBARA entre el 1° de marzo de 1979 y el 10 de marzo de 2000, con el cual acreditaría el tiempo exigido para ser beneficiario del régimen de transición del

Decreto 1281 de 1994, tema que no se planteó en la demanda, donde siquiera se adujo que COLPENSIONES le hubiera dejado de tener en cuenta algún tiempo al demandante o que alguno de sus empleadores se encontraba en mora, por lo que dicho tema no hizo parte del litigio.

Además, al observar la historia laboral del demandante a folios 68/80 se puede establecer que la primera afiliación al sistema del señor OSPINA LOPEZ fue el 28/03/1980 por parte del empleador FORMACOL y después presenta cotizaciones con diversos empleadores hasta el año 2018, sin que ninguno de estos corresponda al empleador RADIO SANTA BARBARA, por lo que no se observa ninguna afiliación por parte del mismo. Así mismo en la Resolución GNR 25371 de 2016 (fl 20/24) se indicó:

“(…) Verificadas las bases de datos de Colpensiones no se observa registro de pagos a nombre del afiliado para los ciclos 1979/01 a 2000/03; ni fecha de afiliación con el empleador Radio Santa Bárbara Nit, 900199176, si posee copia legible de los documentos probatorios de la relación laboral y de aquellos con que se realizaron los pagos, le sugerimos enviarlos como soporte y radicarlos en uno de nuestros Puntos de Atención al ciudadano”

Por tanto, es claro que en el presente caso no se trató de una mora en el pago de aportes, sino que el empleador RADIO SANTA BARBARA omitió la obligación de afiliar al demandante al sistema, por lo que no es dable exigir a COLPENSIONES efectuar las acciones de cobro de que trata el art. 24 de la Ley 100 de 1993, dado que esta obligación surge precisamente a partir de la afiliación, pues antes de este hecho la entidad no tiene por qué conocer de la existencia de la relación laboral que no se le ha informado.

Por consiguiente, en el caso de autos lo que se evidencia es un incumplimiento de las obligaciones propias del empleador frente al sistema de seguridad social, por lo que si se pretendía que el tiempo laborado por el demandante con RADIO SANTA BARBARA entre 1979 y el año 2000 se tuviera en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, la demanda se debió dirigir también en contra del empleador omiso, para efectos de ordenar el pago del correspondiente título pensional, previo cálculo actuarial que realice la administradora, claro está, cuando la actividad probatoria desplegada por el actor, de cuenta de la existencia de la existencia del contrato de trabajo en los extremos temporales que se referencian, lo que no ocurrió en el caso de autos, donde la demanda solo dirigió en contra de COLPENSIONES, y donde el pago del título pensional ni siquiera hizo parte de las pretensiones de la demanda ni fue discutido dentro del litigio. En consecuencia, estima la Sala que contrario a lo que argumenta la apoderada del actor en su recurso, no puede tenerse en cuenta el tiempo que se aduce como laborado con RADIO SANTA BARBARA como semanas cotizadas a efectos de acreditar los requisitos para la pensión especial de vejez que se solicita.

Por tanto, se concluye que el demandante no reúne los requisitos para beneficiarse de la pensión especial de vejez para periodistas, pues no contaba con 40 años de edad ni 750 semanas o 15 años de servicio al 22 de junio de 1994 para beneficiarse del régimen de transición establecido en el Decreto 1281 de 1994 regulado por el Decreto 1837 de 1994, conforme de forma acertada lo analizó la a quo. por lo que debe CONFIRMARSE la decisión absolutoria de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 15 de enero de 2019 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario promovido por el señor **RODRIGO OSPINA LÓPEZ** identificado con c.c. **70.875.699** contra **COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **RODRIGO OSPINA LÓPEZ**
Demandados: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-001-2017-00005-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **12/08/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 16/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario